

Jueves 24 de mayo del 2001

• TRANSICIONES •

Víctor Alejandro Espinoza Valle



Luna de miel y recortes

El sábado pasado, el presidente Vicente Fox afirmaba en su programa semanal ("Fox en vivo, Fox contigo") que la luna de miel entre él y los mexicanos continuaba; que la aceptación hacia su Gobierno era del 78%, es decir, que a pesar de los desaciertos y vaivenes de la política gubernamental durante los primeros cinco meses, la aceptación de la ciudadanía hacia su administración es muy alta. Sin embargo, consultando otras fuentes parecería que, de nuevo, los datos no dan para tanto optimismo. Por ejemplo, la empresa Consulta-Mitofsky en su informe del mes de mayo da cuenta de una encuesta donde se establece que en diciembre del 2000, el 80.2% de los encuestados estaba de acuerdo con la manera como estaba gobernando Vicente Fox; pero para marzo de este año el acuerdo había descendido al 69.7%. Si se replicara la consulta teniendo como trasfondo la discusión sobre la reforma fiscal, es muy probable que los porcentajes descendieran aún más.

El domingo 20 se anunciaban importantes recortes al Fondo General de Participaciones, lo que significa recortes para los gobiernos locales. En el caso de nuestra entidad implica un recorte presupuestal del orden de 150 millones de pesos, que tendrá que llevarse a cabo reduciendo los gastos de operación de las entidades o dependencias gubernamentales, suspendiendo obras por iniciar o en proceso (gastos de inversión), o recurriendo al endeudamiento. Las declaraciones del gobernador Alejandro González Alcocer indican que el Ejecutivo estatal optará por la primera alternativa, la cual deberá instrumentarse en los próximos días. Los recortes se vienen a sumar a las restricciones anunciadas apenas el 11 de mayo pasado por parte del Gobierno federal, cuyo monto asciende a los 3 mil 375 millones de pesos y cuyo objetivo era paliar el déficit del sector público producto de la baja en las exportaciones petroleras. Así, las entidades del país sufren una doble presión, generada por disposiciones del Ejecutivo federal.

Parece quedar claro que las medidas de austeridad de los últimos días están encaminadas a presionar, primero a la Cámara de Diputados, y ahora a los gobiernos estatales, para que acepten la iniciativa de reforma fiscal del presidente Fox. La Nueva Hacienda Pública Distributiva se ofrece así como la panacea ante los desequilibrios presupuestales. El discurso es que si se hubiera aprobado la reforma los recortes saldrían sobrando; ahora se busca que los gobiernos estatales dirijan sus ataques al Congreso por la tardanza que les empieza a afectar por la vía de la reducción del Fondo General de Participaciones. Aunque el plan parezca muy maquiavélico, no se encuentran muchas explicaciones al respecto. El presidente Fox le apuesta mucho a la reforma fiscal y por ello ha echado toda la carne al asador y construido una antinomia: O reforma o no sacaremos al país de la mediocridad.

En todo el país han surgido voces que se oponen decididamente a un aumento u homogeneización del IVA en un 15%. No se trata de oposiciones viscerales; las hay argumentadas y que se basan en estudios serios que miden el impacto económico y social de tales acuerdos. Algunas de éstas provienen de miembros de su mismo partido: El PAN. Por ejemplo, nuestro Gobernador ha defendido, con los datos en la mano, la propuesta de que el IVA continúe tasado en un 10% en la franja fronteriza; un aumento en dicho impuesto podría provocar que los ciudadanos incrementen el volumen de las importaciones significativamente, lo cual afectaría al comercio organizado de la zona. La actitud del Gobernador de Baja California nos indica que las relaciones entre la Federación y los estados se han transformado para bien de los ciudadanos. La oposición de un Ejecutivo estatal al Presidente de la República era prácticamente impensable hace apenas unos años. La disciplina cimentaba los aparatos gubernamentales y partidarios. Eso está en vías de extinción.

Los índices de aceptación hacia el gobierno de Vicente Fox empiezan a declinar; una ciudadanía más conocedora y participativa en los asuntos públicos, obligaría a un mayor realismo por parte del Presidente. Sería capaz de discernir las responsabilidades de los diferentes órdenes de Gobierno. No se trata de que un Gobierno sea mal valorado por los ciudadanos, sino que sus políticas tomen en cuenta la realidad y no se basen simplemente en buenos deseos.

El autor es politólogo, Secretario General Académico de El Colegio de la Frontera Norte.